

# El conflicto armado, en colombia y su expansión fronteriza

William Ortiz Jiménez

**Como citar:** JIMÉNEZ, W. Q. El conflicto armado, en colombia y su expansión fronteriza. *In:* CORSI, F. L.; CAMARGO, J. M.; SANTOS, A.; VIEIRA, R. L. (org.). **Economia e Sociedade:** o Brasil e a América Latina na conjuntura de crise do capitalismo global. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2014. p. 121-157.  
DOI: <https://doi.org/10.36311/2014.978-85-7983-559-9.p121-157>



All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0).

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0).

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin derivados 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0).

# EL CONFLICTO ARMADO, EN COLOMBIA Y SU EXPANSIÓN FRONTERIZA<sup>1</sup>

IMPLICACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE ESTADOS UNIDOS EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA DURANTE EL PERIODO PRESIDENCIAL DE ÁLVARO URIBE (2002-2006)

*William Ortiz Jiménez*

## 1 INTRODUCCIÓN

El inesperado triunfo de Álvaro Uribe en las elecciones presidenciales del 26 de mayo de 2002 con el 53% de los sufragios (COLOMBIA, 2002), tan sólo en la primera vuelta, marcó un hito sin precedentes en la historia electoral colombiana<sup>2</sup>. Hecho que quedó ratificado con su reelección en el 2006, respaldado por el 62,35% de los votantes (COLOMBIA, 2006a). La estrategia política de Uribe “Mano firme, corazón grande” logró canalizar las demandas de los colombianos frente a la inseguridad, la crisis económica, la corrupción, la ingobernabilidad del Estado y el accionar de los actores armados, erigiéndose como el único líder<sup>3</sup> capaz de transformar el desolador escenario político colombiano.

Su candidatura como independiente evidenció el desgate del discurso de los partidos liberal y conservador ante su incapacidad de afrontar los problemas estructurales por los que atravesaba el país, especialmente,

---

<sup>1</sup> Éste artículo es producto de la labor realizada en el marco del proyecto de investigación “Discursos y Representaciones de la Guerra y la Paz en Colombia 1978-2006” de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

<sup>2</sup> Para profundizar en el debate sobre la victoria electoral de Uribe véase Delgado (2003); Losada, Giraldo, y Muñoz, (2003).

<sup>3</sup> La propuesta de “Mano Dura” de Uribe logró generar grandes expectativas en la sociedad civil en cuanto al fin del conflicto, lo cual “inmaculó” su figura y posibilitó la personalización de su liderazgo, de ahí que muchos llegaron a pensar ¿si no es Uribe, entonces quién? “Este ritmo vertiginoso de acción de la figura del presidente explica en buena parte el hecho que su popularidad haya llegado a niveles que oscilaron entre un 60 y un 70%, pese al fracaso de una de sus más importantes iniciativas.” (GALINDO, 2007, p. 152).

<https://doi.org/10.36311/2014.978-85-7983-559-9.p121-157>

el agrario (VÁSQUEZ, 2009). Esto aunado al contundente fracaso de la negociación de paz impulsada por el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), (LEGUIZAMO, 2002; VILLAMIZAR, 2007; ZULUAGA, 2012) con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc- contribuyó a que el discurso y programa de gobierno de Uribe, influenciado por la coyuntura del 11-S<sup>4</sup>, persuadiera a la opinión pública de que la única salida al conflicto armado era la guerra total contra los grupos terroristas.

La coincidencia ideológica entre la “Seguridad Democrática” del gobierno Uribe y la “Doctrina de Agresión Positiva” del gobierno Bush adscribió la guerra colombiana en la lucha global contra el terrorismo. En el diagnóstico de Washington, Colombia era un Estado a punto de colapsar, debido a una profunda crisis de institucionalidad, agudizada por la cooptación de las estructuras de poder por parte de las mafias del narcotráfico y los grupos terroristas, el recrudecimiento del conflicto armado y su desbordamiento hacia las fronteras, la ausencia de la fuerza pública en amplias zonas del territorio y la violación sistemática de los derechos humanos.

Todo este complejo panorama perfiló a Colombia como fuente de inestabilidad para el hemisferio occidental, y una de las principales amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos, influyendo en la decisión del gobierno Bush de intervenir<sup>5</sup>, ya no de forma arbitraria como en el caso de Irak, sino que contó con la invitación del gobierno Uribe para tal acción, quien continuando la política de internacionalización de la problemática colombiana<sup>6</sup> buscó captar con intereses políticos y económicos de por medio, la atención de la comunidad internacional sobre Colombia, para que no sólo participara de la solución del conflicto, sino que legitimara su política de seguridad democrática.

El Plan Colombia, diseñado y pactado en las administraciones de Clinton y Pastrana y vigente desde el año 2000 fue la puerta de entrada a la injerencia directa de la Casa Blanca en los asuntos internos de Colombia.

---

<sup>4</sup> Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 marcaron el inicio de las nuevas amenazas para la seguridad internacional, especialmente para Estados Unidos.

<sup>5</sup> Aunque desde la administración Clinton se había tomado la decisión de injerir en el conflicto interno colombiano a través de la lucha antidrogas y finalmente con el Plan Colombia.

<sup>6</sup> Política iniciada en el gobierno Pastrana mediante la “Diplomacia por la Paz”. Véase, Borda (2007). García-Peña (2001). e Ramírez (2002).

En principio, este acuerdo de cooperación implicaba un gran paquete de políticas de seguridad y ayudas económica y militar restringidas al fortalecimiento de la Fuerzas Armadas y la Policía, la erradicación total de los cultivos ilícitos y la reestructuración social y económica del Estado. Sin embargo, en 2002 el congreso estadounidense aprobó la utilización de la ayuda militar recibida para combatir la contrainsurgencia y paralizar sus acciones terroristas sobre las infraestructuras petroleras, lo que determinó una intervención decidida del gobierno estadounidense en el conflicto armado interno colombiano.

La cooperación estratégica en materia de seguridad entre Colombia y Estados Unidos durante la era Uribe estuvo marcada por muchos matices, pero sin duda alguna, la lucha contra el narcotráfico y los grupos terroristas fue su eje vertebral, debido a la hipótesis de que el negocio del narcotráfico financiaba a los grupos terroristas, y estos a su vez fortalecían las condiciones para la prolongación de esta actividad ilegal. En tal sentido, el fin de las drogas ilícitas y el conflicto armado debían ser el resultado de una misma lucha, la de los amigos contra un enemigo con varios haces.

La lectura de la realidad colombiana realizada por el gobierno Uribe bajo los lentes de Washington ha planteado un debate sustancial sobre la evolución de la dinámica del conflicto dentro de las fronteras colombianas y más allá de ellas. Lo que conlleva a analizar *¿cuáles fueron las implicaciones de la implementación de las políticas de seguridad de Estados Unidos en la Política de Seguridad Democrática durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe (2002-2006)?*, concretamente sobre dos aspectos, por un lado el carácter, la naturaleza y las dimensiones que tomó el conflicto armado, y por el otro, los cambios en las relaciones entre Colombia y sus vecinos, causados por la dicotomía entre la estrategia de “mano dura” de Uribe y las percepciones y los proyectos políticos de los gobiernos de la región.

Con el objetivo de apuntar respuestas a la pregunta formulada en este trabajo, se pretenden en primer lugar, delimitar la construcción en el tiempo de la estrategia de política exterior de Colombia hacia Estados Unidos. En un segundo plano, hacer un recorrido exhaustivo por las diferentes fases de la relación entre los gobiernos de Uribe y Bush en materia de seguridad, resaltando los puntos más importantes y decisivos.

Y en un tercer momento, evidenciar los efectos de la política de seguridad democrática sobre los dos aspectos señalados, derivando sus implicaciones sobre la realidad doméstica de Colombia.

## 2 MIRAR HACIA EL NORTE: SUBORDINACIÓN O PRAGMATISMO

La ausencia de diversificación en las relaciones políticas y comerciales de Colombia<sup>7</sup> ha sido el resultado de la formulación de una política exterior orientada al servicio de las necesidades coyunturales de los gobiernos de turno (TOKATLIÁN, 2000, p. 35), que han coincidido en acercarse a Estados Unidos como el principal aliado en la esfera internacional<sup>8</sup>.

Esta aproximación histórica hacia Washington ha significado para unos la pérdida de autonomía y soberanía de Colombia en el manejo de su política doméstica, fortaleciendo una enérgica dependencia. Para otros, el gobierno colombiano en ejercicio del poder soberano del Estado ha optado por una visión pragmática al invocar la injerencia norteamericana en la solución de las demandas internas. Según Garay (2009, p. 72), “la alianza de Colombia con los Estados Unidos no es resultado de una supuesta subordinación, sino de un pragmatismo por parte del país sudamericano”. En esa misma línea, Tickner (2000, p. 40) arguye que la doctrina del *réspice polum* acogida a comienzos del siglo XX es el arquetipo que “llevó al país a adoptar una posición pragmática de subordinación y alineamiento incondicional con Estados Unidos.”

Si bien ésta óptica es acertada, también lo es el hecho de que, la globalización ha dado lugar a una serie de condicionamientos que reducen la libertad de acción de los gobiernos, “...el surgimiento de problemas nacionales cuya solución sólo es posible en el ámbito planetario y la consolidación de una axiología internacional, han puesto en evidencia la imposibilidad de hacer practicable la idea decimonónica de soberanía nacional” (CORTE CONSTITUCIONAL, 1996). Por tanto, mientras los

<sup>7</sup> “Las relaciones de Colombia con el resto del mundo han estado fuertemente influidas por sus vínculos con Estados Unidos [...] Colombia, luego de la etapa de predominio “bolivarista”, se ha mantenido *aislada del contexto regional* y sus vínculos mundiales han sido escasos.” (DALLANEGRA, 2012, p. 37).

<sup>8</sup> Tendencia marcada desde la divulgación de la Doctrina de Marco Fidel Suarez, el “*réspice polum*”, mirar hacia la estrella del norte, Estados Unidos. Por oposición, a medios de siglo, Alfonso López Michelsen acuñó la doctrina del “*réspice similia*” que implicaba la diversificación de las relaciones en forma horizontal, dando prevalencia al llamado Sur-Sur, pero su aplicación fue fugaz y débil.

lazos de interdependencia se fortalezcan bajo el estímulo de la globalización, “la intervención deja de ser excepcional para convertirse en la regla y ello constituye un desafío mayor para el análisis de la política contemporánea.” (ROJAS, 2009, p. 122).

Con todo, la favorabilidad a la intervención evidenciada en el gobierno de Uribe en función de ese pragmatismo que apela a razones económica y política ha llevado a una profundización de las relaciones hasta un punto tal que “Colombia ha consolidado una relación basada en la subordinación”<sup>9</sup> (GARAY, 2009, p. 80). De esta manera, “la política doméstica estadounidense, su dinámica y su lógica adquieren una gran relevancia y capacidad de incidencia en casi todos los aspectos la vida nacional. Ello hace que los actores y los escenarios se transformen al punto de poder hablar de una “política interméstica”<sup>10</sup> (ROJAS, 2009, p. 122).

## LICENCIA DE INTERVENCIÓN EN COLOMBIA

La presencia militar estadounidense en Colombia ha sido el resultado de un continuo proceso de legitimación mediante una subordinación pragmática que apela a intereses estratégicos. “El acercamiento político y militar entre Colombia y Estados Unidos se selló definitivamente ante los peligros de una confrontación mundial y la necesidad de defender el Canal de Panamá a finales de los años treinta del siglo” (ATEHORTÚA, 2011). Momento desde el cual se puede colegir que, en el último centenario, gobierno tras gobierno ha sido aquiescente a la asistencia y las directrices impuestas por la Casa Blanca en asuntos de seguridad, defensa y política interna.

Para empezar, el desenlace de la Segunda Guerra Mundial a favor de los Aliados solidificó el poder hegemónico de Estados Unidos en el

<sup>9</sup> Para Tokatlián (2000, p. 37-38) esta subordinación es totalmente evidente desde los inicios de la Guerra Fría, con ciertos intentos de diversificación en algunos de los periodos presidenciales siguientes.

<sup>10</sup> Este concepto designa una cuestión que es simultáneamente internacional y doméstica. Según Manning (1997), desde finales del siglo XX, en el contexto del proceso globalizador las relaciones entre las agendas interna y externa de los Estados comenzaron a estrecharse, al punto de hablar de agendas intermésticas. “En 1992, el profesor Abraham Lowenthal concluyó que la política exterior de los Estados Unidos estaría conformada por asuntos que no podrían catalogarse en forma exclusiva como internos o externos, porque la mayoría tendría una combinación de ambos. Las tendencias del sistema internacional, en general, conducen a una situación semejante para cualquier estado” (PARDO, 2001, p. 32).

mundo<sup>11</sup>, influyendo a la elite colombiana, tradicionalmente alineada a la ideología liberal occidental, a adoptar una estrategia de profundización de las relaciones bilaterales con el país del norte. Desde esos tiempos, Colombia se convirtió en una pieza clave para contener la expansión del fantasma comunista en la región y en receptor de una significativa ayuda económica y militar.

Después, a finales de la década del 40, en el marco inaugural del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca –TIAR-, Colombia aprobó el entrenamiento de tropas del ejército y la fuerza aérea por parte de personal norteamericano. Al año siguiente, en el preámbulo de la Guerra de Corea se firmó el “Acuerdo de Asistencia Militar”, pacto que acercó a los dos ejércitos comprometiendo la participación de Colombia en aquél conflicto mediante la provisión de equipos y asesoría militar. Ya en los albores de los años 60, la “Alianza para el Progreso”<sup>12</sup> propuesta por el gobierno de John F. Kennedy intensificaba la influencia de su país sobre Colombia a través de préstamos y ayudas avaluadas en US\$833 millones, lo cual ratificaba la “férrea convicción ideológica de que no habría una segunda Cuba en América Latina” (COLOMBIA..., 2009).

En ese mismo año, 1961, arribaron al país cientos de voluntarios de la agencia federal Cuerpo de Paz como parte de la estrategia trazada por Estados Unidos para solidificar su proyecto de seguridad en la región<sup>13</sup>. Para 1962 las presiones de Washington lograron que la diplomacia colombiana liderara la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos – OEA – durante la octava cumbre en Punta del Este, Uruguay, aduciendo que la alienación del país caribeño con el bloque comunista era incompatible con el sistema interamericano (AGUILERA, 2009, p. 5).

Más tarde, especialmente desde los 70s, la demanda mundial de drogas psicoactivas aumentó considerablemente, al punto que, en los

---

<sup>11</sup> Durante todo el enfrentamiento ideológico y político que dio lugar a la Guerra Fría, la URSS fue la única superpotencia que disputó el poder de influencia alcanzado por Estados Unidos sobre el mundo, especialmente, en occidente

<sup>12</sup> Estrategia para contener los efectos seductores del triunfo de la Revolución Cubana sobre la región. “Se trata de un programa de diez años, financiado por una donación de 20.000 millones de dólares de parte de EE.UU. a los países latinoamericanos... buscaba demostrar que el medio más efectivo para mejorar las condiciones materiales de vida en América Latina era el capitalismo progresista” El Tiempo. (1961). *Nace la Alianza para el Progreso*.

<sup>13</sup> Para profundizar sobre el tema de la presencia militar estadounidense en Colombia véase Atehortúa (2011).

80s Colombia ya se posicionaba como líder mundial en la producción y abastecimiento de estupefacientes, al mismo tiempo que Estados Unidos con el apoyo del gobierno colombiano emprendía una guerra contra los carteles de la droga y las bandas criminales a su servicio<sup>14</sup>. Así pues, con la disolución de la URSS y la caída del Muro de Berlín en 1989, el comunismo deja de ser un factor de inestabilidad para occidente, convirtiendo al tráfico de drogas ilícitas y los conflictos domésticos de la periferia en la principal amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos (CHABAT, 1994, p. 97-98), factor que influye en el cambio de enfoque de las relaciones, se pasa de una agenda anticomunista a una agenda antinarcóticos.

En consecuencia, dada la inseguridad que suscitaba el tema del narcotráfico para la Casa Blanca las ayudas financiera y de logística militar que recibía el gobierno colombiano aumentaron considerablemente para los inicios de la década del 90, al tiempo que se impulsaban las reformas de liberalización del comercio indicadas en el Consenso de Washington. No obstante, desde la misma administración de Cesar Gaviria las relaciones bilaterales comenzaron a debilitarse progresivamente a raíz de los controversiales resultados del sistema de sometimiento de los narcotraficantes a la justicia colombiana (TICKNER, 2000, p. 43).

Pero la situación no causó profundas tensiones sino hasta a la apertura de una investigación en el congreso por la supuesta financiación del cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994<sup>15</sup>, hecho inadmisibles para los círculos políticos del congreso estadounidense, quienes llegaron a catalogar al régimen político colombiano de “narcodemocracia” (RAMÍREZ; RESTREPO, 1997, p. 197).

Este estado de cosas aunado a una serie de escándalos por corrupción fracturó severamente las relaciones entre los dos gobiernos al punto que, “a pesar del cumplimiento entusiasta del gobierno Samper con las exigencias de la política antinarcóticos estadounidense, Colombia

<sup>14</sup> El presidente Ronald Reagan declaró la guerra contra las drogas en febrero de 1982 como una “emergencia nacional” que desafiaba la seguridad interna, calificando a las drogas ilícitas como el enemigo público número uno de Estados Unidos. Según Borda (2002, p. 99), “desde Ronald Reagan todas las actividades relacionadas con el problema de las drogas han sido oficialmente catalogadas como “amenaza a la seguridad nacional” [...] [pero] las drogas no constituyen un amenaza objetiva y a priori a la seguridad [...] clasificar el problema de las drogas en términos de seguridad o de salud pública es una decisión eminentemente política.”

<sup>15</sup> El 12 de junio de 1996, el Comité de Acusaciones de la Cámara de Representantes decidió precluir la investigación y declarar a Ernesto Samper absuelto de los cargos imputados.

fue descertificada en marzo de 1996, aunque al final no se aplicaron sanciones económicas” (TICKNER, 2000, p. 46). Para los últimos meses del cuatrienio, en la coyuntura de las elecciones presidenciales de mayo de 1998, si bien las interlocuciones entre ambos gobiernos habían mejorado significativamente, según Rojas (2009, p. 87), ya se había generado “sobre todo en algunos sectores estadounidenses y entre los países vecinos, la sensación de la necesidad de una intervención más directa ante la amenaza que podía representar Colombia en el contexto internacional.”

En contraposición a las discrepancias y los álgidos momentos de la relación durante el periodo Samper, el ascenso de Andrés Pastrana a la presidencia significó el principio de una nueva etapa de las relaciones bilaterales, donde Colombia sería el amigo infalible de Estados Unidos en la región (CARDONA, 2001, p. 63). Recuperar la imagen de Colombia ante el mundo y gravitar la cooperación internacional sobre el proceso de paz eran unos de los principales objetivos de la gestión internacional iniciada por el nuevo ejecutivo, denominada la “Diplomacia por la Paz”.

Así pues, los resultados no se hicieron esperar, y la reactivación de las relaciones bilaterales le permitió a la administración Pastrana poner en marcha la internacionalización del conflicto armado colombiano. Bajo la lógica depaís amenazado y país amenaza construyó “un consenso en torno a la idea que era necesaria la cooperación internacional para la solución de los asuntos problemáticos” (GARAY, 2009, p. 80). La política exterior logró por un lado, a través de la Diplomacia para la Paz priorizar el proceso de paz con las Farc en la agenda de cooperación internacional de la Unión Europea y canalizar el flujo de recursos destinados a la consolidación de las negociaciones, y por el otro, persuadir al gobierno norteamericano de la centralidad de su papel en la guerra contra los grupos guerrilleros y paramilitares, y su base de financiamiento, el narcotráfico<sup>16</sup>.

Como se puede observar, es evidente que “la insistencia en la necesaria internacionalización de las soluciones al problema de las drogas, proviene de gobiernos anteriores. Pero una característica importante del periodo Pastrana es la relación entre droga y fuentes de violencia en

---

<sup>16</sup> Según Leonardo Carvajal, “se trató de una diplomacia de zanahoria y garrote: por un lado, la diplomacia para la paz, con la cual se buscaba apoyos internacionales para el Caguán. Esa sería la parte zanahoria de la estrategia. La parte garrote de la estrategia era el Plan Colombia.” (DIPLOMACIA..., 2012).

Colombia” (CARDONA, 2001, p. 61). Esta tesis de que las drogas ilícitas son la fuente principal de financiación de grupos alzados en armas, ya sean guerrilleros o autodefensas, fue acogida con ahínco por varios sectores políticos de Washington. Esta nueva visión, condujo a la securitización de la agenda bilateral, la cual durante el año 1999 comenzó a gravitar en torno al diseño de una política integral contra el narcotráfico y toda su cadena de producción, llamada el Plan Colombia.

La aprobación del Plan Colombia por parte del congreso norteamericano evidenció el éxito de la gestión adelantada por el gobierno Pastrana de comprometer totalmente a Estados Unidos en la solución del conflicto armado interno, primero con las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros, y segundo, dada la ruptura de este proceso en febrero de 2002, con la confrontación bélica directa para derrotarlos.

Este camino abonado en política exterior, los efectos de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la amenaza de colapso institucional y el recrudecimiento del conflicto armado interno fueron la antesala a la formulación de la Política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe. Ésta política de “mano dura” partió de la tesis de que la seguridad era el requisito sine qua non para que los otros agravantes de la crisis interna colombiana fueran disipados, por lo que su objetivo principal fue “vincular el conflicto armado a la cruzada internacional liderada por la administración de George W. Bush contra el terrorismo.” (TICKNER; PARDO, 2002, p. 68). El gobierno de Álvaro Uribe se diferenció ampliamente del de su antecesor, a excepción de un solo aspecto, el alto grado de afinidad en la relación estrecha de Colombia con Estados Unidos.

En definitiva, tras cada relevo del ejecutivo colombiano, las relaciones con Estados Unidos han permanecido prácticamente indemnes, puesto que se reconocen los acuerdos anteriormente pactados y se aspira a la profundización de los vínculos en aras de aumentar las proporciones de ayuda económica y militar y legitimar las políticas internas. En otras palabras, la intervención de Estados Unidos en las dinámicas internas se ha convertido en la fuente legitimadora del proyecto político del gobierno colombiano, especialmente durante los ocho años de la administración de Álvaro Uribe.

## DETERMINANTES DE LA AYUDA ESTADOUNIDENSE

El ejercicio del poder hegemónico político y económico relevado al Reino Unido bien entrado el siglo XX ha implicado que gran parte del mundo occidental gravite entorno a Estados Unidos. Su influencia ha sido tal que interponer otras alternativas ideológicas distintas al libre mercado, el Estado derecho, la democracia o a la protección de la propiedad privada implica la declaratoria de amenaza contra la paz y seguridad internacionales (PEÑAS, 1997, p. 54).

En tal sentido, la participación concomitantemente de Estados Unidos en muchas latitudes, no es el resultado de un acto benévolo en favor de los Estados débiles o de la solución de los conflictos internos de la periferia, sino que es la derivación de una prerrogativa para defender y legitimar el sistema internacional, configurado sobre la base de un conjunto de reglas y roles, que a la postre ha posibilitado la perpetuación de relaciones de poder intensas, interdependientes, y sobre todo asimétricas, dinamizadas por la correlación de fuerzas y poderes entre los actores internacionales que disputan una jerarquía protagónica para posicionarse como centros hegemónicos de poder.

En consonancia con lo anterior, la intervención de Estados Unidos en Colombia no responde solo a la afinidad ideológica con la doctrina norteamericana, la subordinación estratégica de los gobiernos, la lucha contra el narcotráfico o a la internacionalización del conflicto armado colombiano, sino que atiende a una decisión eminentemente geopolítica del gobierno de Estados Unidos de disuadir todas las amenazas contra su seguridad nacional, y principalmente, frente a la estabilidad del sistema internacional que ha defendido con vehemencia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

La preocupación del gobierno norteamericano por la complejidad de la crisis colombiana a finales de la década del noventa y comienzos del siglo XXI está vinculada a varios aspectos que afectan sus propósitos en Colombia y en la región. Para empezar, el fortalecimiento de los grupos armados estaba directamente relacionado con su participación en los diferentes eslabones de la cadena de producción de las drogas ilícitas. Tal asociación se evidenció

en la poca disminución de los cultivos de planta de coca, el traslado de estos a otros territorios controlados por la insurgencia (ROJAS, 2006, p. 90), y a la ausencia de resultados contundentes de la política antinarcoóticos, pese a la fumigación aérea con glifosato y los millones de dólares invertidos en erradicación y fortalecimiento de la policía y la fuerza pública.

En un segundo plano, los inversionistas y las empresas norteamericanas del sector energético estaban percibiendo reducidas ganancias debido a los continuos atentados contra los oleoductos petroleros, en especial, el Caño Limón- Coveñas<sup>17</sup> (CARACOL RADIO, 2001), además de los paros armados ilegales declarados por ambas guerrillas en las zonas de explotación de hidrocarburos (CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO, 2001, p. 3), y “el robo de gasolina y de petróleo por parte de paramilitares y guerrilla, actividad que se [había] convertido en otra gigantesca fuente de financiación.” (EL NUEVO..., 2002).

Un tercer aspecto, tiene que ver con el control territorial y político que las Farc habían logrado concentrar en el sur del país, zona geoestratégica para los intereses de Estados Unidos. Allí se ubica la parte colombiana de la Amazonía, región que después del 11-S, ganó relevancia como espacio potencialmente conflictivo por su mega biodiversidad y la capacidad benéfica de sus servicios ecológicos a los grandes problemas globales. “La debilidad institucional de los estados que cuentan con soberanía sobre este territorio genera incentivos que posibilitan el asentamiento de organizaciones criminales transnacionales.” (SAMPÓ, 2003).

Cabe destacar en cuarto lugar, que los ataques de la fuerza pública y las confrontaciones entre las Farc y las Autodefensas estaban extendiendo el conflicto armado hacia las fronteras con Ecuador, Venezuela y Panamá, principalmente. Este fenómeno vislumbraba perjudicial para la lucha contra las drogas por las facilidades de expansión de la economía ilícita, al igual que agudizaba la crítica situación humanitaria de civiles y refugiados. También, suponía una fuente de inestabilidad política para una región vital de la periferia directa de influencia de la Casa Blanca, y obstaculizaba

<sup>17</sup> “Según la investigación de la Fiscalía, entre el 17 de enero de 2000 y el 9 de febrero de 2001 ocurrieron seis atentados terroristas contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, cerca de los municipios de Saravena y Arauca, que causaron derrame de crudo”. (CONDENAN..., 2010).

las negociaciones del proyecto del Tratado del Área de Libre Comercio de las Américas -ALCA-, impulsado por el gobierno norteamericano desde tiempo atrás.

Por último, la existencia de tres grupos armados ilegales en Colombia, posteriormente calificados como organizaciones terroristas por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Unión Europea, legitimaría la Estrategia de Seguridad Nacional<sup>18</sup> proclamada por el gobierno Bush después del 11-S. Además, la eventual derrota y el fin de labase definanciamiento de los grupos terroristas colombianos contribuirían al éxito de la política antiterrorista de Estados Unidos en el mundo.

Así pues, el ánimo intervencionista de los norteamericanos en Colombia no solo se funda en el llamado del gobierno colombiano, sino que prevalecen los intereses nacionales de Estados Unidos que están en juego en medio del conflicto interno colombiano. En este sentido, “desde la perspectiva de Estados Unidos, y teniendo en cuenta que la ayuda externa es fundamentalmente una herramienta para ejercer influencia y dominio sobre los estados clientes en función del propio interés nacional, la intervención en Colombia ha sido eficaz.” (ROJAS, 2009, p. 118).

### **3 LOS AMIGOS EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO**

La alianza estratégica que el gobierno Uribe fomentó con Estados Unidos durante sus primeros cuatro años de gobierno se balanceó entre rentabilidad y subordinación. La priorización de esta relación bilateral sobre los otros actores del sistema internacional fue una apuesta alta que no estuvo exenta de riesgos, pero el gobierno consideró que en el contexto global de la época junto a la intensificación de las crisis interna, la amistad con el gobierno Bush, aunque asimétrica, no solo era imperiosa sino retributiva. “El apego del gobierno colombiano a las políticas de Washington evidencia la convicción de que la ayuda militar estadounidense constituye un elemento indispensable en su propia lucha contra el terrorismo, uno de los ejes principales de la política de seguridad democrática.” (TICKNER; PARDO, 2002, p. 71).

---

<sup>18</sup> Para conocer a fondo los postulados de esta estrategia véase (THE PRESIDENT..., 2002).

## PLAN COLOMBIA: TERRORIZACIÓN DE LA AGENDA BILATERAL

Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la política exterior estadounidense hacia Colombia dio un profundo giro, el enfoque de la agenda bilateral pasó de la narcotización a la terrorización. En ese sentido, Álvaro Uribe, desde su primer periodo presidencial decidió abonar sobre camino fértil al canalizar los resultados de la internacionalización del conflicto armado en la construcción del programa bandera de su gobierno, la Política de Defensa y Seguridad Democrática<sup>19</sup>.

La necesidad de garantizar la continuidad y el aumento progresivo de los recursos líquidos del Plan Colombia para la financiación de la seguridad democrática llevó a que desde su candidatura, Álvaro Uribe adscribiera esta política al discurso de la lucha contra el terrorismo, desconociendo la existencia del conflicto armado interno y reivindicando la tesis de la amenaza terrorista que representaba Colombia. La alineación irrestricta con las posturas del gobierno Bush en su guerra global contra el terrorismo no sólo convirtió al gobierno Uribe en el único aliado de la región, sino que redujo los márgenes de autonomía en la dirección de la política externa e interna colombiana.

A partir de 2002, la utilidad de esta tesis, gestada desde los últimos meses del gobierno Pastrana ante el inminente fracaso de las negociaciones de paz, evidenció sus primeros réditos cuando en febrero, el presidente Bush solicitó al congreso un aumento de US\$48 billones en el presupuesto fiscal de 2003 para los asuntos de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo, al igual que la autorización para que los recursos del Plan Colombia fueran utilizados por el gobierno colombiano en su lucha interna contra los grupos terroristas (U.S. Department of State, 2002).

En esa misma petición, Bush evidencia la prioridad que la seguridad energética tiene para su administración<sup>20</sup> al solicitar que US\$98

<sup>19</sup> La PSD se ejecutó a través de cinco líneas de acción: 1) la consolidación del control del Estado sobre el territorio; 2) la protección de la población; 3) la erradicación de la cadena de producción de las drogas ilícitas; 4) la defensa de las fronteras; y 5) la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Para conocer el documento completo de ésta política véase Colombia (2003).

<sup>20</sup> Anne Paterson en entrevista para El Tiempo dijo que “tras el 11 de setiembre, “las fuentes tradicionales de petróleo para EE.UU. en Oriente Medio son menos seguras”, y agregó que, aunque Latinoamérica no podría

millones del presupuesto fueran destinados a proteger la infraestructura petrolera y otros 300 puntos estratégicos del territorio colombiano, en especial, el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que tiene unos 770 kilómetros de longitud (El Tiempo, 2002, 10 de febrero), y del cual la compañía estadounidense Occidental Petroleum poseía el 50 por ciento. Esos recursos se destinarían al fortalecimiento de la décimo octava Brigada del Ejército con el aprovisionamiento de helicópteros, equipos y el entrenamiento de batallones élites.

El siguiente gran giro ocurrió, cuando el 19 de julio del mismo año<sup>21</sup>, el congreso estadounidense aprobó una ley que levantaba las restricciones impuestas a la ayuda militar otorgada al país a través del Plan Colombia para la lucha contra el narcotráfico (EL DILEMA..., 2002). Esta decisión les permitió a las Fuerzas Militares usar “unos 70 helicópteros y una brigada de operaciones en la lucha contra los grupos insurgentes”, a la vez que el gobierno nacional podía disponer una parte de los 1.300 millones de dólares recibidos en el 2000 para los mismos propósitos.

El nuevo viraje a los recursos del Plan Colombia suprimió la difusa escisión que el gobierno norteamericano había hecho entre lucha contra las drogas y la insurgencia. Además constataba la importancia que cada vez Colombia adquiriría para la estrategia de seguridad estadounidense. Si se observa, ya desde el año 2000, los fondos destinados a la ejecución del Plan Colombia ubicaban al país como el tercer receptor mundial de ayuda estadounidense después de Israel y Egipto. Al igual que la presencia de funcionarios norteamericanos aumentaba significativamente al punto que la embajada norteamericana en Bogotá era la segunda más voluminosa del mundo en términos de personal, precedida por la de Irak.

La urgencia de Washington por comprometer a la región andina con su agenda global antiterrorista fue tal, que para la primera visita oficial del presidente Uribe a la Casa Blanca en septiembre de 2002, el presidente Bush le comunicó la decisión de que Colombia accedería a las preferencias

---

cubrir un desabastecimiento “permite tener un margen de maniobra y evitar la especulación de precios”. (E. U. CUIDARÁ..., 2002).

<sup>21</sup> Al respecto, el representante por Nueva York, Benjamin Gilman, que visitaba por esos días Bogotá, señaló que “el presidente Bush está convencido de que debe acabar con el terrorismo no sólo en Irak, en Libia, o en cualquier nación donde exista, y esto incluye al terrorismo en Colombia.” (E. U. CUIDARÁ..., 2002).

arancelarias estipuladas en el ATPDEA (BUSH, 2002) como incentivo a su gran esfuerzo en una lucha compartida.

Los efectos de las medidas impuestas por Washington y canalizadas por la seguridad democrática se hicieron evidentes con la organización de un número considerable de batallones militares y unidades policiales destinadas a propósitos distintos de la lucha antinarcóticos. Tal es el caso de

la creación de un comando de fuerzas especiales cuyo objetivo [era] la captura de los principales líderes de las guerrillas y los grupos paramilitares, la formación de unidades móviles de carabineros destinadas a aumentar la presencia de la policía en todo el país, el incremento en la ayuda a la unidades antisequestro. (ROJAS, 2006, p. 91).

Para el año 2003, la incondicionalidad de Uribe hacia Estados Unidos llegó a topes insospechados cuando el 20 de marzo comunicó al mundo que apoyaba irrestrictamente la guerra en Irak (COLOMBIA, 2003) iniciada por el gobierno Bush en contra de las resoluciones de la ONU, so pretexto de que éste país almacenaba armas de destrucción masiva y albergaba grupos terroristas. Colombia fue el único país latinoamericano que apoyó a Estados Unidos, gesto que Bush agradeció con la adición de US\$100 millones a los US\$500 millones que ya habían sido establecidos en el paquete de asistencia financiera de 2003.

La expansión militar norteamericana en el mundo después del 11-S era indiscutible, por ejemplo, en Colombia ya operaban 411 militares norteamericanos en misión oficial y unos 290 contratistas civiles. 49 de ellos habían llegado en marzo al país para asistir a las tropas colombianas en las operaciones de rescate de los tres estadounidenses secuestrados por las Farc en Caquetá desde el 13 de febrero (GRINGOS..., 2003).

Adicional a ello, cuando “finalmente las negociaciones del ALCA llegaron a un punto de tensión y estancamiento durante el año decisivo de 2003”. El 23 de abril de ese mismo año, “fue el momento que aprovechó la Administración Uribe para solicitar a Estados Unidos la suscripción de un TLC bilateral” (PULECIO, 2005, p. 16). Acuerdo comercial que ante la oposición de los demócratas en el congreso, fundamentados en la grave crisis de derecho humanos que sacudía al país, el asesinato de sindicalistas, y las diferencias en cuanto al tema agrario, solo fue aprobado el 10 de

octubre de 2011 (APROBADO..., 2011). En su momento, el mandatario estadounidense dijo que “el acuerdo con Colombia era fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos y de interés económico ahora mismo y era demasiado importante para ser retenido por asuntos políticos.” (MACHADO, 2007).

El apremio de contar con el apoyo de Estados Unidos llevó a que el 17 de septiembre del mismo año, el gobierno Uribe se viera obligado a firmar un acuerdo en el cual Colombia se comprometía a no entregar ciudadanos estadounidenses a la Corte Penal Internacional que fueran susceptibles de ser juzgados por ella, de lo contrario el gobierno Bush hubiera suspendido la ayuda económica otorgada a través del Plan Colombia.

Esta decisión reforzó la inmunidad de la que gozan los militares y contratistas estadounidenses desde varios convenios pactados después del fin de la segunda guerra mundial, a ellos se les aplica los Convenios de Viena, tal y como si hicieran parte del cuerpo diplomático estadounidense<sup>22</sup>. Aunque este tipo de inmunidad ha dado lugar a una presunta impunidad respecto de delitos cometidos por personal estadounidense dado que estos deben ser juzgados en su país y conforme a su legislación penal (FUERA..., 2005), las posibilidades de revisar las condiciones del acuerdo son mínimas.

## **PLAN COLOMBIA EXTENDIDO**

El Plan Colombia ha sido el símbolo de la estrecha relación de Estados Unidos y Colombia, sirviendo como una estrategia de doble rasero, por un lado ha permitido que el gobierno colombiano cuente con el apoyo político y económico de la mayor potencia del mundo en el tratamiento de sus demandas domésticas, y por el otro, le ha posibilitado al gobierno estadounidense consolidar sus intereses en el país, legitimar su lucha contra el terrorismo y dirigirse a una región bifurcada por los ideales socialistas.

En su diseño inicial, el Plan estaba contemplado para seis años de vigencia hasta diciembre de 2005, sin embargo dadas las condiciones

---

<sup>22</sup> Aparte de Colombia, 82 países más que están en la aérea de influencia estadounidense, firmaron este tipo de acuerdos. El gobierno norteamericano argumentó que sus tropas estaban en el territorio de alrededor 100 naciones, por lo que era exigible asegurarse de no fueran a ser objeto de persecuciones políticas.

se prolongó hasta los primeros meses de la segunda administración de Uribe. Su costo total ascendió a US\$10.732 millones, de estos recursos, US\$6.950 millones (64,8%) se ejecutaron cargados al presupuesto nacional colombiano, y US\$3.782 millones (35,2%) como contribución del gobierno de los Estados Unidos (COLOMBIA, 2006b, p. 11).

Su segunda fase, denominada, “Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social (2007 - 2013)” presentada en el segundo mandato de Uribe seguía manteniendo la línea focal del periodo anterior al profundizar la visión de la política internacional colombiana en torno a la necesidad de una activa participación internacional en la solución a los problemas del país (ROJAS, 2007, p. 16). Estaba dirigida a conseguir el apoyo de la comunidad internacional para la consolidación de los logros del Plan Colombia y la Política de Seguridad Democrática basados en el principio de la corresponsabilidad (COLOMBIA, 2007, p. 14).

Este nuevo programa, como se esperaba, fue consultado con Estados Unidos quien manifestó su apoyo irrestricto con la visita de Condoleezza Rice en febrero de 2007. La funcionaria manifestó que se mantendrían los esfuerzos actuales en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, ámbitos en los que se ha centrado hasta ahora el controvertido Plan Colombia. Aunque su costo total se triplicó respecto al anterior, estimándose en US\$43.836,6 millones, el aporte de Estados Unidos solo rondaría los US\$3.900 millones con una reducción progresiva. Pero dejaba explícito que “ambos gobiernos continuaban tan cercanos y que harían un frente común para presentar a Colombia ante el Congreso estadounidense como un aliado estratégico en una región convulsionada y comprometer a la mayoría con el Plan Colombia y el TLC” (PLAN..., 2007).

### **PLAN PATRIOTA: ESTADOS UNIDOS EN LA LUCHA CONTRAINSURGENTE**

“Que nos esperen *allá* tranquilos porque *por más espesa la selva y agreste la topografía allá llegaremos para derrotarlos*” dijo Álvaro Uribe en 2003 para referirse al plan militar más ambicioso de su primer mandato, el Plan Patriota. Una agresiva campaña militar lanzada por las Fuerzas Militares de Colombia con la codirección logística, estratégica y operacional del Comando Sur de los Estados Unidos para recuperar

el territorio considerado por años la retaguardia profunda de las Farc y eliminar o capturar a los miembros de su Secretariado.

El Plan Patriota fue diseñado para ser ejecutado en dos fases. La primera fase, se denominó “Operación Libertad” y tenía como objetivo erradicar la presencia guerrillera en la zona céntrica del país, específicamente en el departamento de Cundinamarca y Bogotá. El control sobre las vías de comunicación y las zonas urbanas, la desarticulación de la Farc mediante la baja en combate de cinco de sus jefes de frente y el desalojo de más 400 guerrilleros fueron los resultados alcanzados cinco meses después de su puesta en marcha en junio de 2003 (LIBERTAD..., 2003).

La segunda etapa arrancó con la conformación del grupo de trabajo de la Fuerza de Tarea Omega a finales del mismo año, y se concretó cuando en enero de 2004 las fuerzas armadas iniciaron la mayor ofensiva contra las Farc de los últimos tiempos. A lo largo del Río Caguán, los Llanos del Yará y la Amazonía, 18.000 efectivos trataban de recuperar el sur del territorio nacional cooptado política y militarmente por las Farc (PLAN..., 2006). Habiendo realizado esta tarea con resultados mixtos, el objetivo último era la desarticulación de los principales frentes del Bloque Sur y Oriental, la persecución de los jefes guerrilleros y los miembros del Secretariado en 160.600 kilómetros cuadrados de selva.

Aunque este último ciclo de operaciones fue lanzado el 17 de septiembre de 2004, para los primeros meses de 2006 solo tenía como única captura significativa la de alias “Sonia” considerada la jefe de finanzas del Bloque 14 de las Farc. La ausencia de resultados convincentes se dio en partea que esta organización respondió rápidamente replegando el cuerpo central de sus tropas y conformando grupos minúsculos especializadas en carros bombas y minas antipersona. Los objetivos formuladores del Plan Patriota fueron demasiados ambiciosos, para el fin de la primera era de Uribe las fuerzas del Estado solo habían dado duros golpes a la logística y a las finanzas de las Farc23, sin lograr un punto de quiebre en la guerra (PLAN..., 2006).

---

<sup>23</sup> Los resultados mixtos del Plan Patriota no desmerecen el hecho de que en 6 años de la política de Seguridad Democrática de Uribe, “la presencia estatal en el territorio nacional es un hecho real, con beneficios tangibles para todos los colombianos. Los índices de violencia se han reducido sustancialmente. El secuestro es hoy una fracción de lo que fue. Algunas ciudades colombianas dejaron de ser las capitales mundiales del crimen y se con-

El papel desempeñado por Estados Unidos a través de los Departamentos de Estado y de Defensa, protagonicamente por el Comando Sur en el diseño y la ejecución del Plan Patriota es indiscutible. “El Plan Patriota ha vinculado por primera vez de manera clara y abierta a Estados Unidos en la lucha contrainsurgente colombiana”. “Se calcula que los recursos norteamericanos para este plan superaron los 100 millones de dólares en entrenamiento, armas, inteligencia, equipos de comunicación, entre otros” (FESCOL, 2005, p. 8).

Otra evidencia es la participación de un número importante de asesores militares y contratistas norteamericanos que efectuaban las labores de planeación y soporte logístico de las misiones. La creciente demanda de personal militar especializado en Colombia llevó a que a finales de 2004, el congreso estadounidense aprobara el envío de 400 militares y de 200 contratistas más a Colombia, modificando el tope permitido de 400 efectivos por cada categoría (BBC Mundo, 2004).

Aunque este proyecto interméstico no dio los resultados esperados, constataba el estrecho vínculo que existía entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en la formulación y aplicación de las acciones para enfrentar la problemática interna de Colombia, especialmente la complejidad de un conflicto armado encubierto bajo del discurso narcoterrorista.

## **DESMOVILIZACIÓN PARAMILITAR**

Desde el inicio de las negociaciones de paz entre el gobierno Uribe y las Autodefensas, Estados Unidos se mostró anuente al destinar apoyo económico y acompañamiento político en el desarrollo del proceso. El gobierno Bush “se [erigió] en el tercero en la mesa de negociación, en el árbitro tras bambalinas, de cuyas decisiones en torno a la extradición y la aceptación de las condiciones que se [pactaran] entre el gobierno y los paramilitares dependía el éxito o el fracaso últimos de la negociación” (ROJAS, 2006, p. 100).

El apoyo norteamericano al proceso estaba condicionado a que hubiera “un claro cronograma para la desmovilización, al enjuiciamiento

---

virtieron en urbes dinámicas, con problemas, pero con futuro y esperanza. Las Farc se encuentran diezmasadas. Han perdido su iniciativa y unidad”. (ALVARO..., 2008)

de todos los miembros de las Auc comprometidos en masivas violaciones a los derechos humanos y a que continuara el compromiso de erradicar cultivos ilícitos en las áreas de las Auc” (EN El MAGDALENA..., 2004). Además los programas de reinserción financiados con recursos del Plan Colombia solo debían beneficiar a los miembros de buena fe que se comprometieran a delatar a los narcotraficantes y a los abusadores de los derechos humanos dentro de un marco legal que balanceara los puntos en conflicto. Requisitos transigentes que denotaban la percepción que el país del norte tenía frente a la dimensión y la amenaza que constituía el paramilitarismo para el Estado colombiano, entendía que se debían adoptar medidas que de una u otra manera afectaban la verdad, la justicia y la reparación integral.

La extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos fue uno de los puntos más espinosos en el marco de las negociaciones de paz, debido a que si bien este país apoyaba el proceso de paz, no estaba dispuesto a ceder en dar de baja las solicitudes de extradición de jefes de las autodefensas que tuvieran vínculos con el narcotráfico, pues su política antinarcótico quedaría en entredicho. Incluso, en los primeros meses de 2006 el Senado norteamericano aprobó una ayuda de US\$20 millones para financiar el proceso de desmovilización condicionada a la cooperación de Colombia con la extradición de los solicitados.

No obstante, esta cuestión tensionó fuertemente las relaciones bilaterales durante el primer periodo presencial de Uribe, en el transcurso del segundo, en mayo de 2008 y “de manera sorpresiva el gobierno levantó la suspensión de extradición contra los máximos líderes paramilitares desmovilizados y ordenó de inmediato su traslado a Estados Unidos” (MASIVA..., 2008).

Las percepciones frente a los resultados del proceso de Justicia y Paz con los paramilitares son ambivalentes y dicotómicas. En la visión del gabinete uribista fue un proceso exitoso con resultados positivos para el país, para las víctimas ha fracasado, principalmente en cuanto verdad, justicia y reparación, y para los observadores internacionales el rearme de los desmovilizados en bandas criminales ha afectado la eficacia del proceso. Lo cierto es que la comparecencia de los jefes paramilitares ante la justicia

estadounidense ha dejado en el limbo el conocimiento y juzgamiento de sus acciones delictivas en Colombia.

### **REELECCIÓN DEL DISCURSO ANTITERRORISTA**

Los gobiernos de Bush y de Uribe se [prestaron] mutuamente buenos oficios para que, cada uno, desde su perspectiva e intereses, [pudiera] legitimar el actual enfoque de la seguridad internacional. El primero, en sus intervenciones en el exterior tipo Irak, y el segundo, para resolver su propia guerra interna. (ROJAS, 2006, p. 90).

En ese sentido, la reelección, en el 2004, del presidente George W. Bush significó que los sectores belicosos y fundamentalistas de Washington podían consolidar la tarea, ya iniciada después del 11 de septiembre, lo que de entrada implicaba la continuidad del Plan Colombia y la estabilidad de las relaciones con el mejor amigo de Colombia en el plano internacional, amistad ratificada al ser este el primer país que Bush visitó tras su reelección.

Y como era de esperarse, la reelección de Álvaro Uribe no solo rompió un hito en la historia electoral colombiana sino que representó un triunfo para el gobierno estadounidense, quien desde la presentación del proyecto reeleccionista ante el congreso colombiano respaldaba la continuidad de Uribe en el poder. Tras la victoria, Bush confirmó a Colombia como el gran aliado de la región y le ratificó su compromiso en la lucha contra el narco-terrorismo, la agilidad en el congreso para la aprobación del TLC y en la ayuda a los países democráticos de la región.

La ratificación de Bush y Uribe en el poder en Estados Unidos y Colombia, respectivamente significó la revalidación del discurso antiterrorista. Confirmaba el dinamismo de la reciprocidad y la capacidad de cada uno para reinventarse dentro de sus propios intereses.

### **DESAVENENCIAS EN LA RELACIÓN ESPECIAL**

La fluidez de la relación especial entre Estados Unidos y Colombia ha transcurrido por momentos tensos que constatan el peso decisivo que

tienen los círculos políticos de Washington sobre las políticas domésticas de Colombia.

La corrupción, entendida como enfermedad endémica del sistema político colombiano, fue uno de los lunares que ensombreció la relación bilateral. Durante el primer mandato de Uribe, se presentaron varios casos que involucraban a miembros de alto rango de la fuerza pública con el extravío de cargamentos de cocaína decomisados. Así mismo, se abrieron investigaciones por el despilfarro de fondos antinarcóticos recibidos a través del Plan Colombia.

Otro punto neurálgico de la agenda bilateral, lo constituyó el tema de la extradición de los jefes paramilitares en la coyuntura del proceso de desmovilización. Washington condicionó su ayuda a la aquiescencia del gobierno colombiano de dar vía libre a la extradición de aquellas cabezas visibles de las Auc que hubieran estado involucradas con narcotráfico y a la aplicación de fuertes sanciones a quienes cometieron delitos de lesa humanidad (JUSTICE..., 2005). Frente a ese requerimiento el gobierno Uribe fue ambivalente pues suspendió las órdenes de extradición contra varios jefes paramilitares hasta que en mayo de 2008 decidió enviarlos a Estados Unidos de “manera sorpresiva” (MASIVA..., 2008).

Así mismo, La violación sistemática de derechos humanos en Colombia en medio del conflicto ha generado fuertes críticas y malestar en varios sectores de Estados Unidos. La complicidad del aparato estatal civil y militar con el paramilitarismo en masacres y hechos violentos contra la población civil puso al gobierno colombiano en el ojo del huracán. En los informes anuales sobre derechos humanos que presenta el Departamento de Estado, se denunciaba las restricciones a libertad de expresión y los crecientes homicidios selectivos contra los sindicalistas (U. S. Department of State, 2005).

Esta situación generó el surgimiento de condicionamientos a la ayuda otorgada a través del Plan Colombia, lo cual le permitió al Estado norteamericano ejercer cierta presión sobre el gobierno. Presión exenta de efectos contundentes dado a que la situación de derechos humanos no ocupaba un lugar central en la agenda, “los ejes de las certificaciones de los Estados Unidos se [centraban] en el comportamiento de la fuerza pública y

el funcionamiento de la Rama judicial en Colombia” (RAMÍREZ SIERRA, 2009, p. 192), y la ayuda social en comparación con la militar era mínima.

Finalmente, la oposición demócrata en el congreso estadounidense ejerció fuertes presiones para que se recortaran los recursos al Plan Colombia, el cual se había concentrado en cuestiones represivas que dejaban de lado el componente social, aunado a que los costos de la guerra en Irak y Afganistán estaban asfixiando el fisco estadounidense.

#### 4 IMPLICACIONES DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

La agudización de la crisis colombiana a finales de los 90 evidenciaba la necesidad de tomar decisiones contundentes para evitar el colapso del sistema político colombiano. La elite política local optó por internacionalizar el conflicto armado y solicitar la intervención de Estados Unidos como estrategia pragmática que si bien traería altos costos, sus beneficios serían tangibles, al menos en el corto plazo.

Esta dinámica ha acarreado consecuencias funestas para el ejercicio autónomo del poder político, puesto que el alto grado de dependencia de Estados Unidos para el comercio, la ayuda económica y la formulación de las políticas domésticas hace que pocos líderes del gobierno estén dispuestos a cuestionar los dictámenes de la política estadounidense cuando llegan al poder (TICKNER, 2008, p. 69). Política que ha sido ambivalente y ha estado sujeta a las prioridades en política exterior de Estados Unidos primero, los programas antinarcóticos y ahora la “guerra contra el terrorismo”, lo cual ha desnaturalizado las decisiones políticas internas que se deben tomar para enfrentar las crisis colombiana.

Esta intervención por invitación (TICKNER, 2008) o subordinación pragmática (GARAY, 2009) del gobierno Uribe (2002-2006) a las políticas de seguridad del Estado norteamericano ha revestido un conjunto de implicaciones que, por un lado, modificaron el carácter, la naturaleza y las dimensiones del conflicto armado interno colombiano, y por el otro, encausaron las relaciones con los países vecinos en la lógica del amigo-enemigo.

## CONFLICTO ARMADO

A lo largo de varias décadas el conflicto armado interno mantuvo su carácter endógeno, permitiéndoles a los gobiernos nacionales adoptar políticas de solución doméstica, que mantenían a éste, al margen de las dinámicas y las imposiciones ideológicas de los actores internacionales. Sin embargo, durante el primer mandato de Álvaro Uribe, el conflicto colombiano se internacionalizó a tal punto que se han difuminado las fronteras existentes entre la política doméstica y la internacional.

Esta estrategia de vinculación del conflicto a las dinámicas mundiales ha posibilitado que “los actores internacionales actúen desde sus propias agendas e intereses, promoviendo cada uno un diagnóstico y una visión propia del conflicto y su tratamiento que muchas veces entra en colisión con la perspectiva y las disposiciones del gobierno nacional.” (ROJAS, 2006, P. 88).

Adoptando el diagnóstico estadounidense, el gobierno Uribe adscribió el conflicto armado a la guerra global contra el terrorismo, lo que implicó la redenominación de la naturaleza del conflicto colombiano, pues ya no se trataba de un enfrentamiento político de larga data sino de una amenaza narcoterrorista que fortuitamente podía desestabilizar el hemisferio occidental. La difusión de esta nueva discursiva distorsionó las reglas de juego y descartó cualquier posibilidad de sentar las bases para una salida negociada al conflicto por fuera de las condiciones del gobierno. La Política de Seguridad Democrática junto al Plan Colombia se constituyó en la única alternativa de solución al conflicto.

A la luz de los resultados, la guerra contra el terrorismo redujo a niveles históricos los índices de violencia en los primeros años del gobierno Uribe. Sin embargo, al final de su segundo cuatrienio, estos repuntaban altos inaceptables<sup>24</sup>. El desgaste de la estrategia de seguridad se explica por el privilegio que el Plan Colombia y la Seguridad Democrática le otorgan al fortalecimiento de la estructura militar y policial en desmedro de otras instituciones del aparato estatal.

---

<sup>24</sup> Para los datos oficiales sobre la violencia en Colombia véase Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2010).

Frente a la arremetida militar del gobierno Uribe a los denominados grupos terroristas, las Farc han sabido adaptarse con dinamismo desarrollando otro tipo de tácticas que aún las reivindican como actor importante en el conflicto armado. Todavía miles de combatientes de las Farc controlan zonas remotas, sectores marginales de las ciudades y corredores estratégicos para el tráfico de drogas, continúan difundiendo terror con la detonación de explosivos, reclutando menores y amedrantando muchos lugares del territorio nacional. A la par que sus frentes se han atomizados en verdaderas organizaciones criminales con autonomía, dedicadas a la extorsión y al negocio del narcotráfico.

Así mismo, un número similar de desmovilizados de las Auc han pulsado el aumento de la tasa de homicidios en ciudades como Medellín y Bogotá. Amplias zonas del país continúan bajo su dominio, lo que ha propiciado el rápido crecimiento de bandas criminales como los “Rastrojos”, las “Águilas Negras” y los “Urabeños”, financiadas por el narcotráfico con la misma lógica y estructura paramilitar.

De otro lado, aunque la violencia disminuyó durante el primer mandato de Uribe, secuelas del conflicto armado como el desplazamiento forzado o la violación sistemática de derechos humanos tuvieron ritmos de crecimiento sostenido. El incremento de la fuerza pública y la vinculación de la población civil al conflicto a través de programas como soldados campesinos y red de informantes produjeron efectos inversos en las zonas rurales de valor estratégico para los actores conflictivos, pues aumentó el riesgo de éxodo de las comunidades y los grupos sociales más vulnerables. La desmovilización de las Auc no mejoró en nada la situación, sino que por el contrario agravó el drama de las víctimas con la impunidad. En Colombia persiste una emergencia humanitaria, que ubica al país como el segundo con la tasa más alta de desplazamiento interno en el mundo después de Sudán (ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS, 2010).

La situación de los derechos humanos es igualmente preocupante. Al fin del primer periodo de Uribe, persistían homicidios con características de ejecución extrajudicial atribuidos a miembros de la fuerza pública, amenazas contra miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos, periodistas y maestros; violaciones del derecho a la libertad, a

la seguridad personales mediante detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas y del derecho a la integridad personal mediante torturas, malos tratos y uso excesivo de la fuerza, imputados a servidores públicos. Además, con la intensificación de la guerra, los grupos armados ilegales han persistido en la comisión de infracciones graves y sistemáticas del derecho internacional humanitario (OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, 2006). La deuda por la reivindicación de los derechos humanos de quienes han llevado el peso del conflicto sigue latente y en ascenso, mientras no tengan lugar la verdad, la justicia y la reparación integral.

Ahora bien, las debilidades de una política formulada por fuera de los intereses nacionales se evidencian en los resultados de la lucha antinarcoóticos. En su asunción al poder, Uribe prometió la erradicación total de los cultivos de coca en el país para el año 2006, término no alcanzado y que por la necesidad de garantizar la ayuda económica de Estados Unidos se extenderá a pesar de los costos y los escasos resultados.

Para el último año del segundo periodo de Uribe, el gobierno norteamericano había invertido más de US\$ 7 mil 300 millones en el Plan Colombia alardeando de su éxito y la necesidad de repetir este modelo en otros países productores de coca. Sin embargo, este programa no ha sido propiamente un éxito, el flujo de drogas hacia Estados Unidos sigue constante, la política de fumigaciones no sólo fue cruel al no otorgar a los campesinos otras opciones de subsistencia, sino que fue poco efectiva porque se ajustaron los patrones de cultivo para producir casi el mismo volumen de cocaína en un espacio más reducido.

Por lo pronto, los grandes carteles de la droga se han reorganizado en pequeñas bandas criminales con líderes poco visibles que controlan puntos claves del tráfico y siguen manteniendo fuertes vínculos con organizaciones de otros países como México (ISACSON, 2010). “La realidad es que incluso los congresistas estadounidenses que hace una década se mostraban más entusiastas con el Plan Colombia reconocen ahora (al menos en privado) que la política antidroga ha sido un tremendo chasco y que deben explorarse otros planteamientos alternativos.” (SHIFTER, 2010).

Es incuestionable que la seguridad democrática mejoró la percepción de seguridad en la sociedad dinamizando la economía nacional y fortaleciendo la institucionalidad del Estado. No obstante, la persistencia del gobierno Uribe en la apuesta a la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos ha llevado a la adopción de un enfoque de solución del conflicto armado muy distante del que necesita Colombia.

La experiencia de Colombia ofrece lecciones importantes, pero copiar su modelo en otros casos sería desastroso. Los escándalos, abusos, engaños y altos costos del “Plan Colombia” impiden presentarlo como algo digno de imitar en otros Estados dependientes de Estados Unidos. (ISACSON, 2010).

## PAÍSES VECINOS

La adscripción de la problemática colombiana a la agenda exterior de Estados Unidos causaba recelo en una región donde la llegada de los gobiernos de izquierda y la necesidad de construir consensos subregionales hacía imperante distanciarse de la hegemonía norteamericana. Ante esta posición,

Colombia ha perdido margen de maniobra y de negociación con actores internacionales distintos a Estados Unidos, y se ubica en contravía de la tendencia en la región por diversificar sus relaciones internacionales, buscar escenarios internacionales alternativos y establecer bazas de negociación diferenciadas. (ROJAS, 2006, p. 102).

El desbordamiento del conflicto armado hacia las fronteras con los países vecinos y la afinidad ideológica del gobierno Uribe con Estados Unidos exacerbó las relaciones bilaterales con los gobiernos de la región. Los vecinos se mostraron recelados y amenazados frente a las consecuencias de la ejecución del Plan Colombia<sup>25</sup> sobre las fronteras, al tanto que rechazaron con vehemencia la propuesta del gobierno Uribe de conformar una fuerza multilateral para derrotar a los grupos terroristas y regionalizar de la seguridad democrática. Países como Brasil, Ecuador y Venezuela se negaron a calificar a las guerrillas como terroristas.

<sup>25</sup> El diseño del Plan Colombia no contó con la participación de los gobiernos vecinos. Estos no fueron enterados sino hasta el inicio de su ejecución en el año 2000.

No obstante, en el 2002 el gobierno Bush bajo el discurso de fortalecer la democracia, la estabilidad regional y el desarrollo económico para todo el hemisferio, regionalizó su política de seguridad mediante la Iniciativa Regional Andina con un plan inicial de inversión de US\$782 millones (BUSCH, 2002). Una extensión del Plan Colombia que comprometía a la región con su agenda antinarcóticos y paliaba los efectos secundarios del conflicto colombiano. Entre los beneficiados estaban Perú, Venezuela, Ecuador, Brasil, Panamá y Bolivia. Al igual que Colombia, los resultados de este programa fueron poco exitosos. “Los intereses de Washington estaría también el de aprovechar su presencia en zonas colombianas como Caquetá y Putumayo para controlar recursos como el agua o las muy diversas especies amazónicas e internacionalizar la Amazonia.” (RAMÍREZ, 2006, p.71).

Los gobiernos de la región atravesaron una etapa de encuentros y desencuentros que implicó un aumento significativo del pie de fuerza militar en las fronteras. El presidente Uribe estaba determinado a hostigar a las Farc hasta donde fuera necesario, hecho que se evidenció con la intervención de miembros de la fuerza pública colombiana en la captura de alias Simón Trinidad en Ecuador y el cruce arbitrario de la frontera con este país para perseguir guerrilleros de las Farc. Así mismo sucedió en Venezuela con la detención de Rodrigo Granda sin el previo conocimiento del gobierno de Hugo Chávez. Estos sucesos llevaron a un punto crítico la relación bilateral por la flagrante violación de la soberanía.

El gobierno colombiano y, en general, las elites gubernamentales, políticas y económicas del país parecían subestimar las graves consecuencias de una similar estrategia estadounidense, tanto para Colombia como para toda la zona andino-amazónica, ignorancia tanto más grave cuanto que Washington parece estar promoviendo la incomprensión y el fraccionamiento de los países vecinos para impulsar mejor sus propios intereses geopolíticos. (RAMÍREZ, 2006, p. 71).

Los problemas internos de cada país sumado a la imposición del gobierno Bush de que siguieran su estrategia de seguridad imposibilitaron la construcción de consensos y propuestas conjuntas para repeler los efectos devastadores del conflicto armado colombiano y la inmersión a la que se habían visto expuestos los países fronterizos.

Ante la percepción de los vecinos, Colombia era vista como el escenario selecto de Washington para propiciar una intervención en América Latina. La ayuda económica y militar, la llegada de militares y contratistas norteamericanos, la coordinación de este país en el diseño de las estrategias de ataque a las guerrillas y la subordinación del gobierno eran evidencias que confirmaban las sospechas de como el país del norte se tomaba la región, y la administración Uribe consentía en ello. La integración de Colombia con la región no ha sido fácil y más aún cuando ha estado “interferida por Washington, que ha tratado de manejar bilateralmente los asuntos de seguridad con cada país andino bajo sus propias perspectivas e intereses, y por esa vía ha contribuido a la fragmentación de la región.” (RAMÍREZ, 2006, p. 83).

## CONCLUSIONES

El presidente Álvaro Uribe, en su primera gestión, subordinó la solución del conflicto armado a los intereses de la lucha antiterrorista de Estados Unidos, persistiendo en la opción de la vía armada como el único camino factible. La priorización de la relación con Washington no solo redujo la autonomía de Colombia para hacer un frente consensuado a la crisis interna sino que, al mismo tiempo, obstaculizó el avance hacia una verdadera integración andina.

Los resultados del Plan Colombia y la Seguridad Democrática se califican de ambiguos y poco convincentes. Las fumigaciones redujeron los cultivos ilícitos en el sur del país para desplazarlos a otras zonas y a mayor escala. La violencia se contrajo en los primeros años de gobierno con efecto rebote a través de nuevas lógicas de organización criminal. El incremento de la presencia del Estado a través del fortalecimiento de la Fuerzas Militares y la Policía socavó las prioridades del desarrollo social y económico. La relación especial con el gobierno Bush determinó a Colombia como portavoz de su estrategia de seguridad nacional en la región y uno de los más grandes beneficiarios de la ayuda estadounidense, lo que lo convirtió en un referente destabilizador para los países vecinos. En otras palabras, no se puede afirmar que la experiencia de la lucha antiterrorista en Colombia ha sido un éxito absoluto.

En suma, los profundos intereses que Estados Unidos tiene en juego que dependen de la evolución del conflicto armado en Colombia hace poco probable el fin de su intervención, por el contrario, la dependencia de Colombia a su ayuda ha acelerado e intensificado los efectos de la globalización en cuanto a las nuevas políticas de seguridad, lo que implica que las posibilidades reales de solventar el conflicto armado colombiano van a depender de la concurrencia de los demás actores internacionales, a menos que Colombia aprovechando la nueva coyuntura internacional asuma un cambio estructural en la estrategia de política exterior y lidere los debates políticos internacionales desde las demandas internas del país.

## REFERENCIAS

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS -ACNUR. *Directrices de elegibilidad del ACNUR para la evaluación de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo de Colombia*. 2010. Disponible em: <<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8118>>. Acceso em: 23 out. 2012.

AGUILERA, G. Cuba y la OEA. *Nueva Sociedad*, n. 223, p. 4-14, sep./oct.2009. Disponible em: <[http://www.nuso.org/upload/articulos/3628\\_1.pdf](http://www.nuso.org/upload/articulos/3628_1.pdf)>. Acceso em: 16 ago. 2012.

ÁLVARO Uribe: seis años en el poder. *El Espectador*, 6 ago. 2008. Disponible em: <<http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-alvaro-uribe-seis-anos-el-poder>>. Acceso em: 23 ago. 2012,

APROBADO el tratado de libre comercio con Estados Unidos. *Portafolio*, 12 out. 2011. Disponible em: <<http://www.portafolio.co/negocios/aprobado-el-tratado-libre-comercio-estados-unidos>>. Acceso em: 17 set. 2012.

ATEHORTÚA, A. La presencia de Estados Unidos en la formación de los militares colombianos a mediados del siglo XX. *Historia y Espacio*, n. 36, 2010. Disponible em: <<http://historiayespacio.com/rev%2036/pdf/rev36art4.pdf>>. Acceso em: 9 set. 2012.

BBC MUNDO. Por la ruta del Che. 2004. Disponible em: <[http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2004/ruta\\_che/default.stm](http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2004/ruta_che/default.stm)>. Acceso em: 15 mar. 2012

BORDA, S. La internacionalización del conflicto armado después del 11 de septiembre: ¿La ejecución de una estrategia diplomática hábil o la simple ocurrencia de lo inevitable? *Colombia Internacional*, n. 65, p. 66-89, 2007. Disponible em:.,

<<http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/92/view.php>>. Acesso em: 22 fev. 2012.

\_\_\_\_\_. Una aproximación constructivista a la guerra estadounidense en contra de las drogas. *Colombia Internacional*, n. 54, p. 73-102, 2002. Disponível em: <<http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/395/index=1.php?action=edit&id=395#1>>. Acesso em: 27 ago. 2012.

BUSH, G. W. Andean trade promotion and drug eradication act by President of the United States of America. *White House Office of the Press Secretary*, 2002, 31 oct. Disponível em: <<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/10/20021031-9.html>>. Acesso em: 15 ago. 2012.

CARACOL RADIO. Nuevo atentado terrorista contra oleoducto Caño Limón-Coveñas. 11 out. 2001. Disponível em: <<http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/nuevo-atentado-terrorista-contra-oleoducto-cano-limoncoveñas/20011011/nota/78893.aspx>>. Acesso em: 22 ago. 2012.

CARDONA, D. La política exterior de la administración pastrana (1998-2002) hacia una evaluación preliminar. *Colombia Internacional*, n. 53, p. 53-74, 2001. Disponível em: <<http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/386/view.php>>. Acesso em: 27 jul. 2012.

CHABAT, J. Seguridad nacional y narcotráfico. *Política y Gobierno*, v.1, n. 1, p. 97-123, 1994. Disponível em: <[http://www.politicaygobierno.cide.edu/num\\_anteriores/Vol\\_I\\_N1\\_1994/Chabat.pdf](http://www.politicaygobierno.cide.edu/num_anteriores/Vol_I_N1_1994/Chabat.pdf)>. Acesso em: 15 set. 2012.

COLOMBIA block US extradition. *The Guardian*, 2004 18 Dic. Disponível em: <<http://www.theguardian.com/world/2004/dec/18/colombia>>. Acesso em: 13 out. 2012.

COLOMBIA para los americanos. *El Espectador*, 18 jul. 2009. Disponível em: <<http://www.elspectador.com/impreso/politica/articuloimpreso151378-colombia-los-americanos>>. Acesso em: 16 ago. 2012.

\_\_\_\_\_. Departamento Nacional de Planeación - DNP. *Balance Plan Colombia 1999-2005*. 2006. Disponível em: <[https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DJS/DJS\\_Documentos\\_Publicaciones/Bal\\_plan\\_Col\\_espanol\\_final.pdf](https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DJS/DJS_Documentos_Publicaciones/Bal_plan_Col_espanol_final.pdf)>. Acesso em: 13 set. 2012.

\_\_\_\_\_. Departamento Nacional De Planeación - DNP. *Estrategia de fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social (2007-2013)*. 2007. Disponível em: <[https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DJS/DJS\\_Documentos\\_Publicaciones/estrategia\\_version\\_espanol.pdf](https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DJS/DJS_Documentos_Publicaciones/estrategia_version_espanol.pdf)>. Acesso em: 13 set. 2012.

\_\_\_\_\_. Presidencia de la República. *La decisión del gobierno colombiano sobre Iraq*. Bogotá, 20 mar. 2003. Disponible em: <<http://web.presidencia.gov.co/discursos/discursos2003/marzo/alocucion3.htm>>. Acceso em: 16 jun. 2012.

\_\_\_\_\_. Registraduría Nacional del Estado Civil. *Organización Electoral*. Histórico de resultados electorales, Elecciones presidente. 2006. Disponible em: <<http://web.registraduria.gov.co/resprelec2006/0528/index.htm>>. Acceso em: 16 nov. 2012.

\_\_\_\_\_. Registraduría Nacional del Estado Civil. *Organización Electoral*. Histórico de resultados electorales, elecciones presidente. 2002. Disponible em: <<http://web.registraduria.gov.co/2002PRP1/e/vpresidente0.htm?1>>. Acceso em: 16 nov. 2012.

\_\_\_\_\_. Presidencia de la República. *Política de defensa y seguridad democrática*, 2003. Disponible em: <http://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf>>. Acceso em: 18 set. 2013.

\_\_\_\_\_. Departamento Nacional de Planación. *Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006: Hacia un Estado Comunitario*. Disponible em: <<https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/PND/PND.pdf>>. Acceso em: 18 set. 2013.

CONDENAN a 13 años de cárcel a guerrilleros del ELN por los atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas. *El Tiempo*, 4 ago. 2010. Disponible em: <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7842749>>. Acceso em: 22 ago. 2012.

CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO. *Boletín CODHES*, n. 39, nov. 2001. Disponible em: <[http://www.codhes.org/index2.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&gid=25&Itemid=5](http://www.codhes.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=25&Itemid=5)>. Acceso em: 22 ago. 2012.

CORTE CONSTITUCIONAL. *Sentencia C-187 de 1996, Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz*. 1996. Disponible em: <[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-187\\_1996.htm](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-187_1996.htm)>. Acceso em: 13 fev. 2012.

DALLANEGRA, L. Claves de la política exterior de Colombia. *Política Exterior Latinoamericana*, n.54, p. 37-73, 2012. Disponible em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64023055003>>. Acceso em: 21 nov. 2012.

DELGADO, O. (Ed.). *Elecciones 2002 presidenciales y parlamentaria*. Bogotá: Centro Editorial Universidad del Rosario, 2003.

DIPLOMACIA de Zanahoria y Garrote. *El Tiempo*, 16 de fev. 2012. Disponible em: <[http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/caguan-proceso-paz/ARTICULO-WEB-NOTA\\_INTERIOR\\_MULTIMEDIA-11154883.html](http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/caguan-proceso-paz/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_MULTIMEDIA-11154883.html)>. Acceso em: 22 out. 2012.

E.U. CUIDARÁ su interés en Colombia. *El Tiempo*, 10 fev. 2002. Disponível em: <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1324656>>. Acesso em: 13 ago. 2012.

EL DILEMA social del plan. *El Tiempo*. 14 out. 2002. Disponível em: <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1370358>>. Acesso em: 13 ago. 2012.

EL GRAN garrote. *Semana*, 6 de ago. 2001. Disponível em: <<http://www.semana.com/nacion/articulo/el-gran-garrote/48177-3>>. Acesso em: 15 set. 2012.

EL NUEVO narcotráfico. *Semana*, 22 set. 2002. Disponível em: <<http://www.semana.com/nacion/articulo/el-nuevo-narcotrafico/54190-3>>. Acesso em: 22 ago. 2012.

EN EL MAGDALENA medio le temen a la desmovilización. *El Tiempo*, 21 fev. 2004. Disponível em: <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1579481>>. Acesso em: 15 set. 2012.

FARC y AUC, Enemigos Globales. *El Tiempo*, 25 set. 2001. Disponível em: <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-660694>>. Acesso em: 15 set. 2012.

FESCOL. La agenda Colombia-Estados Unidos: TLC y Plan Colombia. *Policy Paper*, n.16, p. 1-12, 2005. Disponível em: <<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/50475.pdf>>. Acesso em: 25 ago. 2012.

FUERA de control. *Semana*, 9 mayo 2005. Disponível em: <<http://www.semana.com/portada/articulo/fuera-control/72521-3>>. Acesso em: 17 ser. 2012

GALINDO, C. Neopopulismo en Colombia: el caso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. *Iconos*, n. 27, p. 152, 2007.

GARAY, J. Un recorrido por las relaciones Colombia-Estados Unidos: del pragmatismo a la subordinación. *Oasis*, n. 14, p. 71-81, 2009. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53117118005>>. Acesso em: 13 out. 2011.

GARCÍA-PEÑA, D. Caguán Internacional: Lecciones para Gobierno y FARC. *Semana*, 02 abr. 2001. Edição 983. Disponível em: <<http://www.semana.com/opinion/articulo/caguan-internacional-lecciones-para-gobierno-farc/45527-3>>. Acesso em: 12 fev. 2012.

GRINGOS al rescate. *Semana*, 3 mar.2003. Disponível em: <<http://www.semana.com/nacion/articulo/gringos-rescate/56755-3>>. Acesso em: 12 ago. 2012.

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Forensis.2010. Disponível em: <<http://www.medicinalegal.gov.co/index.php/estadisticas/forensis/457-forensis-2010>>. Acesso em : 15 jul. 2013.

ISACSON, A. Si el Plan Colombia es éxito, ¿qué es un fracaso? Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. 2010. Disponível em: <<http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/1191-si-el-plan-colombia-es-un-exito-ique-es-un-fracaso.html>>. Acesso em: 12 set.2012.

JUSTICE and Peace in Colombia. *The Washington Post*, 01 ago. 2005. Opiniões. Disponível em: <<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/07/31/AR2005073100803.html>>. Acesso em: 13 out. 2012

LEAL, F. La política de seguridad democrática 2002-2005. *Análisis Político*, v. 19, n. 57, p. 3-30, 2006. Disponível em: <<http://www.iepri.org/portales/anpol/57.pdf>>. Acesso em: 22 mar. 2012.

LEGUIZAMO, C. Reflexiones sobre el proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana y las FARC-EP (1998-2002). *Archivos de Economía*, DANE, n. 204, ago, 2002. Disponível em: <[https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Archivos\\_Economia/204.PDF](https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Archivos_Economia/204.PDF)>. Acesso em: 13 out. 2011.

LIBERTAD acorrala a las Farc. *El Tiempo*, 8 nov. 2003. Disponível em: <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1000445>>. Acesso em: 12 ago. 2012.

LOSADA, R.; GIRALDO, F.; MUÑOZ, P. Las elecciones presidenciales de 2002 en Colombia: un esfuerzo explicativo. *Papel Político*, n. 15, p. 11-31, 2003. Disponível em: <<http://revistas.javeriana.edu.co/sitio/papelpolitico/admin/upload/index.php?act=view&cid=77>>. Acesso em: 21 nov. 2011.

MACHADO, G. G. Bush juega sus cartas para llevar el TLC al congreso. *El Colombiano*, 2007. Disponível em: <[http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/bush\\_juega\\_sus\\_cartas\\_para\\_llevar\\_el\\_tlc\\_al\\_congreso/bush\\_juega\\_sus\\_cartas\\_para\\_llevar\\_el\\_tlc\\_al\\_congreso.asp](http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/bush_juega_sus_cartas_para_llevar_el_tlc_al_congreso/bush_juega_sus_cartas_para_llevar_el_tlc_al_congreso.asp)>. Acesso em: 16 ago. 2012.

MASIVA extradición de jefes paramilitares. *El Espectador*, 13 mai. 2008. Disponível em: <<http://www.elespectador.com/node/13431/>>. Acesso em: 12 set. 2012.

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS - OACNUDH. *Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia*. 2007. Disponível em: <[http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/Informe2006\\_esp.pdf](http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/Informe2006_esp.pdf)>. Acesso em: 23 out. 2012.

ORTIZ, J. *Los paraestados en Colombia*. Medellín: UNAULA, 2009.

PARDO, R. Relaciones internacionales y proceso de paz, proyecciones sobre escenarios. *Colombia Internacional*, n. 51, p. 28-50, 200. Disponível em: <<http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/378/view.php>>. Acesso em: 21 nov. 2012.

PEÑAS, F. *Occidentalización: fin de la guerra fría y relaciones internacionales*. Madrid: Alianza Editorial, 1997.

PLAN Colombia II. *Semana*, 3 fev. 2007. Disponível em: <<http://www.semana.com/nacion/articulo/plan-colombia-ii/83278-3>>. Acesso em: 13 set 2012.

PLAN Patriota. *Semana*, 5 fev. 2006. Disponível em: <<http://www.semana.com/on-line/articulo/plan-patriota/70525-3>>. Acesso em: 22 de set. 2012.

PULECIO, J. La estrategia Uribe de negociación del TLC. *Colombia Internacional*, n. 61, 12-32, 2005. Disponível em: <<http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/449/>>. Acesso em: 17 ago. 2012.

RAMÍREZ, A. Diplomacia por la paz: la implementación de la política exterior en Colombia desde el proceso de paz. *Contexto*, 13, p. 69-73, 2002. Disponível em: <[http://190.7.110.123/pdf/5\\_revistaContexto/Contexto/Archivo/Contexto%2013/AndresMRamirez.pdf](http://190.7.110.123/pdf/5_revistaContexto/Contexto/Archivo/Contexto%2013/AndresMRamirez.pdf)>. Acesso em: 16 set. 2012.

RAMÍREZ SIERRA, N. J. Redes transnacionales de defensa. El caso reciente del Estado colombiano en el contexto de la intervención de la Corte Interamericana de Derecho Humanos. *Colombia Internacional*, n. 69, p. 182-203, 2009. Disponível em: <<http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/406/view.php>>. Acesso em: 13 set. 2012.

RAMÍREZ, S. La internacionalización del conflicto y de la paz en Colombia”, In: *El Plan Colombia y la internacionalización del conflicto*. Bogotá: IEPRI; Planeta, 2002.

RAMÍREZ, S. Colombia y sus vecinos. *Nueva Sociedad*, n. 192, p. 144-154, 2004. Disponível em: <[http://www.nuso.org/upload/articulos/3214\\_1.pdf](http://www.nuso.org/upload/articulos/3214_1.pdf)>. Acesso em: 12 jul. 2012.

RAMÍREZ, S. El gobierno de Uribe y los países vecinos. *Análisis Político*, v. 19, n. 57, p. 65-84, 2006. Disponível em: <[http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-47052006000200004&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-47052006000200004&script=sci_arttext)>. Acesso em: 12 jul. 2012.

RAMÍREZ, S.; RESTREPO, L. (Coord.). *Colombia: entre la inserción y el aislamiento, la política exterior colombiana en los años noventa*. Bogotá: Siglos del Hombres Editores ; Universidad Nacional de Colombia; Instituto de Estudios Políticos Relaciones Internacionales, 1997.

ROJAS, D. Balance de la política internacional del gobierno Uribe. *Análisis Político*, v. 19, n.57, p. 85-105, 2006. Disponível em: <<http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v19n57/v19n57a05.pdf>>. Acesso em: 10 ago. 2012.

ROJAS, D. El Taller del Imperio Global: análisis de la intervención de Estados Unidos en Colombia (1998-2008). *Análisis Político*, v. 22, n. 65, p. 111-126,

2009. Disponível em: <<http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v22n65/v22n65a06.pdf>>. Acesso em: 22 abr. 2012.

SAMPÓ, C. Brasil y la región amazónica después del 11 de septiembre: desafíos y oportunidades. *Argentina global*, Buenos Aires: Centro Argentino de Estudios Internacionales, n. 14, p. 100-117, sep./dic. 2003. Disponível em: <[http://www.academia.edu/3465846/Brasil\\_y\\_la\\_Region\\_Amazonica\\_despues\\_del\\_11\\_de\\_Septiembre\\_Desafios\\_y\\_Oportunidades](http://www.academia.edu/3465846/Brasil_y_la_Region_Amazonica_despues_del_11_de_Septiembre_Desafios_y_Oportunidades)>. Acesso em: 22 ago. 2012.

SHIFTER, M. Una década del Plan Colombia: por un nuevo enfoque. *Política Exterior*, v. 24, n.136, p. 116-130, jul/ago. 2010. Disponível em: <<http://www.politicaexterior.com/archives/8631>>. Acesso em: 19 set. 2012.

THE PRESIDENT of the United States. In: *The National Security Strategy of the United States of America*, 2002. Disponível em: <<http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf>>. Acesso em: 18 set. 2012.

TICKNER, A. Colombia y Estados Unidos: una relación “especial”. *Foreign Affairs Latinoamérica*, v. 8, n. 4, p. 65-72, 2008. Disponível em: <<http://www.revistafal.com/2008-4/colombia-y-estados-unidos-una-relacion-especial.html>>. Acesso em: 22 set. 2012.

\_\_\_\_\_. Tensiones y consecuencias indeseables de la política exterior estadounidense. *Colombia Internacional*, n. 49, p. 39-61, 2000. Disponível em: <<http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/370/view.php>>. Acesso em: 14 ago. 2012.

\_\_\_\_\_.; PARDO, R. En busca de aliados para la seguridad democrática. *Colombia Internacional*, n. 56, p. 64-81, 2002. Disponível em: <http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/461/view.php> Acesso em: 10 ago. 2012.

TOKATLIÁN, J. G. Sudamérica y el dilema de Colombia. *Revista SAAP*, v.1 n. 2, p. 411-422, 2003. <<http://www.saap.org.ar/esp/docs-revista/revista/pdf/1-2/Tokatlian.pdf>> Acesso em: 13 out. 2012.

\_\_\_\_\_. La mirada de la política exterior de Colombia ante un nuevo milenio: ¿Ceguera, miopía o estrabismo? *Colombia Internacional*, n. 48, p. 35-36, 2000. Disponível em: <<http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/361/view.php>>. Acesso em: 16 nov. 2012.

U. S. The National Security Strategy of the United States of America. 2002. Disponível em: <<http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf>>. Acesso em: 13 ago. 2012.

\_\_\_\_\_. Department of State. Budget request funds war on terror, military transformation. Washington, 04 feb. 2002. Disponível em: <<http://www.defense.gov/News/NewsArticle.aspx?ID=43976>>. Acesso em: 13 ago. 2012.

\_\_\_\_\_. Department of State. Diplomacia em Ação. Country reports on human rights practices, 2005. Colombia. 08 mar. 2006. Disponível em: <<http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2005/61721.htm>>. Acesso em: 17 out. 2012.

VÁSQUEZ, T. El problema agrario, la economía cocalera y el conflicto armado. *Controversia*, n. 192, p. 121-162, 2009. Disponível <<http://www.cinep.org.co/node/746>>. Acesso em: 16 out. 2011.

VILLAMIZAR, M. A. Crónica de aquellos días y noches de paz y de guerra. *Semana*, 22 fev. 2007. Edición 1295. Disponível em: <<http://www.semana.com/on-line/articulo/cronica-aquellos-dias-noches-paz-guerra/83622-3>>. Acesso em: 12 fev.2012.

ZULUAGA, J. El síndrome de El Caguán: lecciones de un fracaso. *Razón Pública*, 26 fev. 2012. Disponível em: <http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/2746-el-sindrome-de-el-caguan-lecciones-de-un-fracaso.html>. Acesso em: 15 mar. 2012.